

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 7 de septiembre de 2026

Habiendo celebrado Acuerdo la Cámara Segunda del Trabajo de la Tercera Circunscripción Judicial, integrada por las Dras. Alejandra M. Paolino y María de los Angeles Pérez Pysny y el Dr. Jorge A. Serra, quienes deliberaron sobre la temática de la causa **"ANTUNAO, PABLO ALFREDO C/ GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTES DE TRABAJO" - Expte. Nro. BA-00752-L-2024** y qué pronunciamiento corresponde dictar, se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme el orden de sorteo previamente practicado de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 55 de la Ley 5631:

--- **El Dr. Jorge Serra dijo:**

--- **I) ANTECEDENTES:**

--- **I-a)** Se presenta Pablo Alfredo Antunao, con el patrocinio letrado del Dr. Matías Osvaldo Posca, e interpone demanda contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA.- Reclama la suma de \$ 6.775.716,16.-, o lo que resulte de la prueba a producirse, más intereses y costas (Mov. I0001).-

--- Plantea la inconstitucionalidad de las normas que enumera en el Apartado I, último párrafo y funda en el Apartado XI.

--- Relata que al momento del siniestro (28/3/23), el trabajador se desempeñaba en relación de dependencia para La TECNICA SRL como operario de tareas generales, en el establecimiento comercial sito en Onelli 1233 de esta Ciudad.-

---Respecto al accidente, señala que en momentos en que se dirigía al lugar de prestación de servicios, al salir de su residencia se resbaló de manera súbita e imprevista, sufriendo la torsión de la rodilla izquierda con chasquido articular.-

--- La ART recepcionó la denuncia del siniestro y ordenó su traslado al Sanatorio San Carlos, habiendo recibido los tratamientos que detalla (inclusive quirúrgicos).- El día 6/7/23, la ART le dio el alta con secuelas y reincorporación a sus tareas habituales, lo que motivó que iniciara el procedimiento administrativo ante la Comisión Médica, en el que se concluyó que presentaba una ILPPD del 4,58 % a consecuencia del siniestro objeto de la causa.- Funda los cuestionamientos que efectúa al dictamen médico, así como el proceso ante la Comisión Médica.

--- Detalla las consecuencias psico-físicas del infortunio y cuantifica las incapacidades en un 23,00 % de la T.O. Practica liquidación, y en relación a los intereses, solicita se aplique lo normado por el art. 11 de la ley 27.348, que remite al art. 770 del Cod. Civ. y

Com.

--- Ofrece pruebas, funda en derecho la demanda, formula reserva de caso federal y peticiona que se haga lugar a la demanda con costas.

--- **I-b)** Corrido el traslado de la demanda, se presenta el Dr. Luis María Terán Frías, en representación de Galeno ART S.A. (Mov. E0002).-

--- Opone excepción de falta de acción.- Niega los hechos invocados en la demanda y sostiene que una vez denunciado el siniestro, su mandante proporcionó al trabajador todas las prestaciones correspondientes a su lesión, hasta el alta médica del 6/7/23.- En desacuerdo con dicha decisión, inició expediente ante la Comisión Médica, en el que se determinó que el actor había sufrido una ILPPD del 4,58 % (Expte. SRT 477685/23) y al no haber acuerdo se cerró el caso.-

--- Se pronuncia respecto a la forma en que debería resultar de aplicación el RIPTE (Ap. X, XI y XIII -DNU 669/19-), solicita se decrete la inconstitucionalidad del art. 770, inc. "b" del Cod. Civ. y Com. y a todo evento se ordene la repetición del fondo fiduciario de enfermedades profesionales, para el caso de resultar condenada (Ap. VI).-

--- Ofrece prueba, se manifiesta respecto de la improcedencia del cálculo de intereses, formula reserva del caso federal y solicita el rechazo de la demanda, con costas.-

--- **I-c)** Siendo que he de referirme a las distintas cuestiones planteadas y que componen la litis, me remito a la lectura de los fundamentos expuestos por las partes, a los fines de evitar extender en forma innecesaria el presente voto.

--- **I-d)** Habiéndose desestimado la excepción de falta de acción interpuesta por la demandada (Mov. I0004), se dispuso la producción de la prueba que el Tribunal estimó conducente (Mov. I0007). Habiéndose diligenciado aquella que obra agregada al Sistema Puma, se celebró audiencia en los términos del art. 41 de la ley 5631 (Mov. I0033). No habiendo las partes arribado a acuerdo alguno, formularon alegatos las partes (Mov. E0037 y E0038).

--- **I-e)** En función de la liquidación de la demandada, se presentó la Dra. María Inés Sánchez Otharán, en representación de GCQ & ASOC. SAS., a su vez representante de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en su carácter de administradora legal del Fondo de Reserva (Mov. E0034).- Aclaró que dicha firma fue designada para la gestión y atención de los reclamos judiciales y extrajudiciales que debe afrontar dicho Fondo, no revistiendo carácter de parte ni de continuadora de la ART en liquidación, correspondiendo al Fondo de Reserva afrontar, en su caso, las prestaciones a cargo de

Galeno ART SA que ésta hubiera dejado de cumplir como consecuencia de su liquidación.

--- Invocó la aplicación del Decreto 1022/17 y del art. 129 de la LCQ, sosteniendo que la responsabilidad del Fondo de Reserva se encuentra limitada a las prestaciones reconocidas por la Ley 24.557 y sus modificatorias, con exclusión de las costas y gastos causídicos.

--- Asimismo, postuló como fecha límite para el cómputo de intereses el 09/03/2026, correspondiente a la liquidación judicial de GALENO ART S.A., y planteó la inembargabilidad de los recursos del Fondo de Reserva.

--- Habiéndose corrido traslado a la parte actora, solicitó la desestimación de los planteos formulados.- Me remito a la lectura de dicha presentación (Mov. E0036).-

--- **I-f)** Por Presidencia se ordenó el pase de los autos al Acuerdo (Mov. I0048), por lo que se encuentran las actuaciones en condiciones de emitir un pronunciamiento definitivo en este acto.

--- **II) HECHOS:**

--- Conforme lo dispuesto por el Art. 55 de la Ley 5631, me referiré a las cuestiones de hecho que considero relevantes y conducentes a los fines de resolver la litis.-

--- En tal sentido, cabe señalar que:

--- **II-1)** No se encuentra controvertida la existencia del accidente denunciado, ni que la A.R.T. hubiera asumido las prestaciones médico asistenciales. Más aún, la ART afirma en su contestación de demanda que la atención fue brindada hasta el alta otorgada el 06/07/2023.-

--- Obran agregadas las constancias remitidas por la Comisión Médica, pero las mismas se refieren a un tercero ajeno al litigio.-

--- **II-2)** Habiendo invocado la parte actora la existencia de una ILPPD del 23 % derivada del siniestro denunciado y ante la postura contraria sustentada por la accionada, se dispuso la producción de pericias médica y psicológica.

--- La pericia médica fue realizada por la Dra. Andrea Alvarez, Médica del CIF (Mov. E0012).

--- La perita concluyó que *"...Del análisis de la documental médica obrante en autos y el relato de los hechos durante la anamnesis, el actor habría sufrido entorsis de su rodilla izquierda mientras se dirigía desde su domicilio hacia su lugar de trabajo, por el cual, de acuerdo a la documental médica obrante, fue derivado a prestador de la ART siendo asistido con prestaciones médicas, quirúrgicas y fisiokinésicas de*

rehabilitación. Desde el punto de vista estrictamente médico laboral, el mecanismo del evento traumático sufrido por el actor podría haber sido idóneo para poner de manifiesto lo constatado al examen físico realizado. Por lo expuesto, desde el punto de vista estrictamente médico laboral, de acuerdo a la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales Decreto 659/96 le podría corresponder una incapacidad del 6,5 % de la total obrera. "

--- Determinó que la lesión le genera al actor una ILPPD del 6,5 %, valorando una incapacidad preexistente y los *factores de ponderación*.-

--- Por su parte, la Lic. Luciana Inés Varesco, concluyó su dictamen señalado que *"....Como no se configuran síntomas compatibles con un diagnóstico psicopatológico de un trastorno mental, no se puede considerar que exista una reacción vivencial anormal neurótica, por lo cual no ha sufrido un daño psíquico.*

o La situación del examinado no se encuentra comprendida en el listado de enfermedades profesionales relacionadas con el sistema nervioso o con reacciones emocionales patológicas derivadas de condiciones laborales."

--- A los fines de evitar repeticiones innecesarias, me remito a una lectura íntegra de ambos dictámenes, por resultar claros y de fácil comprensión para una persona ajena a la medicina.-

--- En lo que hace a su apreciación, y tal como lo he señalado reiteradamente, si bien en modo alguno dichos dictámenes son obligatorios para el Juzgador, no es menos cierto que para apartarse de ellos debe encontrar sólidos argumentos, ya que se trata de campos del saber ajenos al hombre del derecho y debe partirse del presupuesto de la buena fe de los peritos.-

--- Es indudable que admitir la posibilidad de que el Juzgador per se pudiera efectuar una valoración de cuestiones estrictamente médicas, abriría la posibilidad de pronunciamientos que resultarían manifiestamente arbitrarios.

--- Dicho criterio se ajusta a lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia, en autos "LLANQUILEO" (STJRNS3: Se. 36 del 07/04/2025).-

--- Por otra parte, la impugnación formulada por la demandada (Mov. E0013), ha merecido adecuada respuesta de parte de la Dra. Alvarez (Mov. E0015), con remisión a los antecedentes médicos de la causa.- Y tal como lo informara la perita, no participó del examen del trabajador un consultor técnico por parte de la ART.-

--- A mayor abundamiento y conforme lo dictaminado, no debe olvidarse que en materia de infortunios laborales resultaría de aplicación el principio de indiferencia de

las concausas, respecto del cual se ha pronunciado en reiteradas ocasiones este Tribunal (expte. BA-00118-L-2023, fallo del 4/6/24 y conforme criterio del STJ en "FERNANDEZ", Se. 31/12).-

--- En consecuencia, y habiendo analizado en conciencia la prueba colectada (art. 55, inc. 1º de la ley 5631), considero acreditado con el grado de verosimilitud suficiente a los fines de fundamentar el presente pronunciamiento definitivo, que el actor presenta una ILPPD del 6,5 % derivada de la contingencia padecida el día 28/3/23. Ello así, teniendo en cuenta además que corresponde la aplicación del Baremo vigente al tiempo de practicarse la evaluación (conforme fecha de presentación del dictamen), es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de las modificaciones introducidas por el Decreto 549/25-.

--- **II-3)** Obra informe remitido por ARCA (Mov. I0014), agregando detalle de las remuneraciones liquidadas al demandante entre marzo de 2022 y marzo 2023.-

-- **III) DECISORIO:**

En función de lo expuesto en los apartados precedentes, corresponde resolver respecto del reclamo indemnizatorio:

--- **III-a)** En lo que se refiere al art. 43 de la Res. 298/17, el mismo establece: *"Valor de Ingreso Base. No integrarán el cálculo del Valor del Ingreso Base, conforme lo establecido en el artículo 12 de la Ley N° 24.557, sustituido por el artículo 11 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, aquellas sumas que correspondan a los conceptos establecidos en el artículo 7º de la Ley N° 24.241 y los artículos 103 bis y 106 de la Ley N° 20.744, y todo otro concepto que no integre el salario aun cuando se liquide conjuntamente con él".*

--- Siendo que el Art. 12 de la LRT que reglamenta el artículo claramente refiere al Convenio 95 de la OIT, que incluye todos los ingresos del trabajador sin ninguna exclusión, la reglamentación altera y modifica la ley, por cuanto omite la inclusión de los beneficios sociales y viáticos de la LCT. Por ello, al modificar la letra y el espíritu de la ley, solo le cabe la tacha de inconstitucional (art. 196 de la Constitución Provincial).

--- **III-b)** Teniendo en consideración la ILPPD del 6,5 % y la doctrina establecida por el STJRN en la materia, deberá extraerse el resarcimiento establecido en el art. 14 inc. 2do. "a" de la ley 24.557, actualizando el ingreso base conforme el inc. 2 de la Ley 24557; T.O DNU 669/19 (interés equivalente a la tasa de variación RIPTE -conf. Res. 332/23 SRT-).

--- Ello, sin perjuicio de la aplicación en su caso, de los mínimos resarcitorios legales (sobre lo cual he de volver al considerar la aplicación de eventuales intereses).-

--- Conforme doctrina del STJRN, no corresponde en el caso la adición del 20 % establecido en el art. 3ro. de la ley 26.773, por tratarse de un accidente *in itinere* -

--- **III-c) De los planteos formulados por la representación del Fondo de Reserva:**

--- Determinado el modo en que deberá calcularse la prestación dineraria correspondiente al actor, corresponde abordar los planteos introducidos mediante mov. E0034 por la representación de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en su carácter de administradora del Fondo de Reserva previsto por el art. 34 de la Ley 24.557, en tanto se vinculan directamente con los alcances de la obligación cuyo cumplimiento aquí se reconoce.

--- A tal fin, y por razones de orden expositivo, corresponde analizar separadamente las cuestiones relativas al límite temporal de los intereses; la exclusión de las costas y gastos causídicos pretendida con fundamento en el Decreto 1022/17; y, finalmente, la inembargabilidad de los recursos del Fondo invocada por la compareciente.

--- Dejo constancia que he de transcribir en forma literal expuesto por la Dra. Pérez Pysny en su voto rector emitido en los autos caratulados "CARDOZO, LUIS ALBERTO C/ GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTES DE TRABAJO" - Expte. Nro. BA-00276-L-2025 (fallo del día 18/08/2026 [-enlace al protocolo web-](#)), en tanto comparto los fundamentos vertidos por mi colega y he adherido en esa oportunidad como 2do. votante.-

--- Las cuestiones resultan similares a las aquí planteada por la representante del Fondo de Reserva (ver presentación registrada como Mov. E0044 en dicha causa).-

--- **III-c.1) De los intereses:** La representación del Fondo de Reserva sostiene que los intereses correspondientes al crédito del actor sólo pueden calcularse hasta la fecha en que se decretó la liquidación judicial de Galeno ART SA, y que los devengados con posterioridad deberán ser reclamados en el proceso liquidatorio de dicha aseguradora. Invoca en sustento de su postura el art. 129 de la Ley de Concursos y Quiebras.

--- Este Tribunal ha sostenido desde el precedente "GALEANI, GABRIEL C/ INTERACCION A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO (I)", Exp. N° 25135/13 que, producida la liquidación de la aseguradora, corresponde al Fondo de Reserva creado por el art. 34 de la Ley 24.557 afrontar las obligaciones que aquélla hubiera dejado de cumplir como consecuencia de su liquidación ([enlace protocolo web](#)).

--- Dicho criterio fue posteriormente receptado por el Superior Tribunal de Justicia en

"PIERANTONI, ANGELA CELESTE C/ PREVENCIÓN ART S.A. (Gerenciadora del Fondo de Reserva de la LRT) s/ Accidente de Trabajo", Se. 108 del 18/09/2020 -[enlace al protocoloweb](#)-. Allí, con remisión también al precedente "PALMA", el STJ destacó que el mecanismo previsto por el art. 34 de la LRT procura garantizar eficazmente el cumplimiento de las prestaciones que la aseguradora deja de satisfacer como consecuencia de su liquidación, descartando una interpretación que obligara al trabajador a transitar un nuevo trámite para obtener el cobro de las sumas reconocidas judicialmente.

--- Partiendo de tales premisas, advierto que la pretensión de establecer como límite para el curso de los intereses la fecha de liquidación de Galeno ART S.A. no encuentra sustento ni en el régimen especial de riesgos del trabajo ni en la normativa concursal invocada.

--- En primer término, el art. 34 de la Ley 24.557 establece que con los recursos del Fondo de Reserva se abonarán las prestaciones a cargo de las ART que éstas dejen de satisfacer como consecuencia de su liquidación, sin establecer limitación temporal alguna respecto de los intereses correspondientes al crédito.

--- Los intereses constituyen un accesorio de la obligación principal y hacen a la integridad de su cumplimiento. Mientras subsista la mora, el pago del crédito no puede considerarse íntegro si no comprende los intereses devengados.

--- La liquidación de la aseguradora constituye, precisamente, el presupuesto que torna operativo el Fondo de Reserva. No corresponde atribuir a esa misma circunstancia un segundo efecto, no previsto en el art. 34 de la LRT, consistente en cristalizar el crédito del trabajador a esa fecha y trasladarle las consecuencias económicas del tiempo que transcurra hasta su efectivo pago.

--- Dicho de otro modo, la intervención del Fondo sustituye al sujeto que debe afrontar la prestación frente a la imposibilidad de cumplimiento de la ART liquidada, pero no altera la naturaleza ni el contenido del crédito que debe garantizar. Admitir la postura contraria implicaría que la insolvencia de la aseguradora produzca una disminución de la acreencia reconocida al trabajador, resultado incompatible con la finalidad misma para la cual fue instituido el Fondo de Reserva.

--- Pero, además, tampoco el art. 129 de la Ley 24.522 invocado por la compareciente conduce a la solución que pretende.

--- Si bien dicha norma establece como principio general que la declaración de quiebra suspende el curso de intereses de todo tipo, exceptúa expresamente de dicha regla a los

intereses compensatorios devengados con posterioridad que correspondan a créditos laborales.

--- Por lo tanto, aun cuando la cuestión fuera examinada exclusivamente desde la normativa concursal invocada, no existe fundamento para aplicar al crédito de autos la regla general de suspensión y prescindir, al mismo tiempo, de la excepción que la propia norma establece en razón de su naturaleza laboral.

--- Y ninguna duda puede existir respecto de dicha naturaleza. La acreencia aquí reconocida deriva de un accidente de trabajo y consiste en una prestación dineraria del sistema de la Ley 24.557. La posterior liquidación de la aseguradora y la consecuente intervención del Fondo de Reserva no modifican el origen laboral del crédito.

--- La solución expuesta encuentra, además, respaldo en precedentes que han debido resolver planteos sustancialmente análogos.

--- Así, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en autos "MONZÓN, RAMÓN ALBERTO C/ ART Liderar S.A. s/ Accidente - Ley Especial", Expediente N° CNT 32777/2012, sentencia del 10/02/2021, sostuvo que *"...no existe fuente que permita eximir al Fondo de Reserva del cumplimiento integral de la condena en tanto los intereses resultan un accesorio de la obligación principal, teniendo en cuenta que el pago del crédito no se considera íntegro si no incluye igualmente a los intereses"*.

En el mismo pronunciamiento, al analizar específicamente el art. 129 de la Ley de Concursos y Quiebras, señaló que la norma establece que *"no se suspenden los intereses compensatorios devengados con posterioridad que correspondan a créditos laborales"*, y concluyó que los intereses debían ser asumidos por el Fondo de Reserva hasta el momento de su efectivo pago.

--- En igual sentido, la Sala I de dicho Tribunal, en "DOTTA, DIEGO GERMAN C/ Aseguradora de Riesgos del Trabajo Interacción S.A.", sentencia del 02/09/2020, -[enlace](#)- desestimó la pretensión de limitar los accesorios de condena a la fecha de liquidación judicial de la aseguradora, con fundamento en la excepción prevista por el art. 129 LCQ respecto de los créditos laborales. Y por su parte, la Sala VII, en "GUTIÉRREZ, MAURO LEONEL C/ ART Interacción S.A. s/ Accidente - Ley Especial" (Expte. N° 50514/2016), sentencia del 27/05/2024, frente a una pretensión de la administradora del Fondo dirigida a limitar los intereses a la fecha de liquidación de la aseguradora, sostuvo que *"la letra misma del texto legal aludido desbarata la solicitud recursiva en estudio pues, difícilmente, podría discutirse la estirpe de*

acreedor laboral del trabajador beneficiario de una indemnización tarifada derivada de un accidente de trabajo, cubierto por el régimen de la ley 24.557".

--- En definitiva, la pretensión formulada procura obtener de la liquidación de Galeno ART S.A. un efecto que no surge de ninguno de los dos regímenes jurídicos involucrados: el art. 34 de la LRT no establece un corte de intereses a la fecha de liquidación de la aseguradora y el art. 129 LCQ, lejos de imponerlo respecto de este crédito, contempla expresamente una excepción respecto de los intereses correspondientes a créditos laborales.

--- En consecuencia, corresponde rechazar el límite temporal pretendido y establecer que los intereses correspondientes a la prestación reconocida en autos deberán calcularse hasta su efectivo pago, conforme las pautas que seguidamente se establecen: para el caso de que la obligada al pago no abone en tiempo oportuno y en forma íntegra los montos liquidados, se procederá de conformidad con lo normado en inc. 3 art. 12 Ley 24.557, T.O. según Decreto 669/19 y art. 770 CCyC.

Es decir, se acumularán los intereses al capital en forma semestral, hasta la efectiva cancelación del crédito, utilizando un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.

--- De la eventual aplicación de pisos mínimos: Todo ello, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de los mínimos resarcitorios legales.

--- Sólo bajo dicho supuesto, el monto resultante deberá ajustarse a los mínimos legales resarcitorios, debiendo aplicarse la resolución SRT vigente al momento del siniestro y calcularse los intereses desde la fecha del mismo, conforme la secuencia establecida por el STJ como doctrina obligatoria.

--- **III-c.2)** De las costas y gastos causídicos. Constitucionalidad del Decreto 1022/17: La representación del Fondo de Reserva sostiene asimismo que, conforme lo dispuesto por el Decreto 1022/17, su responsabilidad se encuentra limitada a las prestaciones reconocidas por la Ley 24.557 y sus modificatorias, quedando excluidas las costas y gastos causídicos derivados del presente proceso, los que deberán ser reclamados en la liquidación judicial de Galeno ART S.A.

--- La cuestión exige examinar la validez constitucional de la norma reglamentaria invocada, sin que obste a ello la falta de contestación del traslado conferido respecto de la presentación E0044 ni la ausencia de un planteo expreso de inconstitucionalidad por parte de la actora o de sus letrados.

--- El art. 196 de la Constitución de la Provincia de Río Negro establece que corresponde al Poder Judicial verificar, a pedido de parte o de oficio, la constitucionalidad de las normas que aplica. Y, en el caso, el control no se plantea respecto de una disposición ajena a la solución del litigio ni importa emitir una declaración meramente abstracta.

--- Por el contrario, el Decreto 1022/17 ha sido expresamente invocado por la representación del Fondo de Reserva y su aplicación produciría una consecuencia concreta e inmediata en esta sentencia: excluiría de la garantía del Fondo las costas y gastos causídicos derivados del proceso en el que se reconoce la prestación debida al trabajador.

--- Existe, entonces, una cuestión constitucional actual y concreta que torna necesario verificar la compatibilidad de la norma reglamentaria con la ley que pretende reglamentar y con los límites impuestos al Poder Ejecutivo por la Constitución Nacional.

--- Sentado ello, el punto de partida debe ser el art. 34 de la Ley 24.557, que creó el Fondo de Reserva y estableció que con sus recursos "se abonarán o contratarán las prestaciones a cargo de la ART que éstas dejarán de abonar como consecuencia de su liquidación".

--- Como ya señalé, esta Cámara, con su anterior integración, había interpretado en "GALEANI" el alcance del mecanismo de garantía instituido por el art. 34 de la LRT, criterio posteriormente ratificado por el Superior Tribunal de Justicia en diversos precedentes.

Cabe precisar, sin embargo, que aquel criterio fue establecido con anterioridad al dictado del Decreto 1022/17 y que, aun en "PIERANTONI", de fecha posterior, el STJ no examinó la constitucionalidad de dicha norma reglamentaria; por ello, si bien no corresponde atribuir a esos precedentes una solución sobre la cuestión constitucional examinada, sí resultan relevantes para establecer la finalidad y el alcance reconocidos al Fondo de Reserva.

--- El Decreto 1022/17 sustituyó posteriormente el art. 22 del Decreto 334/96 y estableció que "la obligación del Fondo de Reserva alcanza al monto de las prestaciones reconocidas por la Ley N° 24.557 y sus modificatorias, excluyéndose las costas y gastos causídicos".

La disposición anterior, establecía en el Art. 22 que *"El Fondo de Reserva no responderá por las prestaciones derivadas de los servicios que las Aseguradoras se*

encuentran habilitadas a contratar conforme al artículo 26 apartado 4 de la Ley sobre Riesgos del Trabajo"; esta norma autoriza a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo a contratar con sus afiliados el otorgamiento de prestaciones dinerarias previstas en la legislación laboral para casos de accidentes y enfermedades inculpable.

--- De la comparación entre ambas disposiciones surge el problema constitucional que corresponde resolver: la ley creó el Fondo de Reserva para afrontar las prestaciones que la ART deja de abonar como consecuencia de su liquidación. No estableció, en cambio, que las costas y gastos causídicos derivados de la obtención judicial de ese cumplimiento quedaran excluidos de la garantía. Esa exclusión fue incorporada posteriormente por la reglamentación.

--- No desconozco el argumento según el cual el art. 34 de la LRT utiliza el término "prestaciones" y que las costas y honorarios profesionales no constituyen, en sentido técnico, prestaciones dinerarias o en especie previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo.

--- Sin embargo, considero que ése no es el punto que define la cuestión constitucional.

--- No se trata de afirmar que los honorarios o gastos causídicos constituyan autónomamente prestaciones de la LRT, sino de determinar si el Poder Ejecutivo podía, mediante una norma reglamentaria, introducir una exclusión que el legislador no incorporó al regular el mecanismo de garantía previsto para el supuesto de liquidación de una ART. Y en tal sentido, entiendo que no podía hacerlo.

El art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional faculta al Poder Ejecutivo a expedir las instrucciones y reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes, pero le impone expresamente hacerlo *"cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias"*.

--- La potestad reglamentaria permite integrar la ley con aquellas disposiciones necesarias para su ejecución. No habilita, en cambio, a modificar su contenido mediante la incorporación de excepciones que no fueron establecidas por el legislador.

--- En el caso, el Decreto 1022/17 no se limitó a establecer el modo de funcionamiento del Fondo de Reserva, sino que incorporó expresamente una exclusión que no se encontraba contenida en el art. 34 de la Ley 24.557.

--- Y esa diferencia resulta decisiva: reglamentar la forma en que una garantía legal debe hacerse efectiva no equivale a poder restringir por vía reglamentaria su alcance mediante una excepción no prevista en la norma de superior jerarquía.

--- La liquidación de la ART no constituye un hecho imputable al trabajador ni a los

profesionales y auxiliares que debieron intervenir en el proceso. Es, precisamente, la circunstancia que determina la actuación del Fondo de Reserva.

--- Admitir que esa misma liquidación permita desplazar hacia el trabajador vencedor o hacia los profesionales y auxiliares los costos derivados del proceso importa hacer recaer sobre ellos consecuencias económicas de la insolvencia de la aseguradora.

--- Si las costas y gastos causídicos quedan fuera de la garantía y deben perseguirse exclusivamente en la liquidación de una aseguradora insolvente, su percepción queda sometida a las contingencias propias de ese proceso. Ello puede incidir sobre la indemnidad del crédito del trabajador y sobre la efectividad de la tutela judicial laboral.

--- A su vez, los honorarios profesionales constituyen la retribución por las tareas desarrolladas por abogados y peritos en el proceso y revisten carácter alimentario. Su exclusión de la garantía importa trasladar a dichos profesionales las consecuencias económicas de una insolvencia que les resulta ajena y que, precisamente, constituye el presupuesto de actuación del Fondo de Reserva.

--- Existe, además, otra consecuencia que no puede soslayarse desde la perspectiva del acceso efectivo a la justicia. Si frente a la insolvencia de la aseguradora los honorarios quedan excluidos de la garantía y sujetos a su percepción en el proceso liquidatorio, ello puede dificultar, en términos concretos, que los trabajadores encuentren profesionales dispuestos a asumir su representación en litigios en los que el eventual cobro de su retribución quede sometido a las contingencias de aquel proceso. La cuestión excede así el interés patrimonial individual del letrado y se vincula con la efectividad de la tutela judicial que el sistema pretende garantizar y que comprende también la posibilidad real de acceder a una asistencia letrada idónea.

--- A ello se agrega una consecuencia institucional particularmente relevante, que pone de manifiesto que la restricción introducida por el Decreto 1022/17 no sólo debe ser examinada frente a los términos del art. 34 de la Ley 24557, sino también en su relación con otras disposiciones de jerarquía legal que integran el propio sistema de riesgos del trabajo.

--- En efecto, el art. 2 de la Ley 27348 estableció que los peritos médicos oficiales que intervengan en las controversias judiciales suscitadas en el marco de la Ley 24557 deben integrar el cuerpo médico forense de la jurisdicción interviniente o entidad equivalente; reguló específicamente las pautas para la determinación de sus honorarios y previó el recurso a profesionales externos cuando aquellos no existieran en cantidad suficiente para intervenir con la celeridad requerida. Y existe aquí un dato cronológico

relevante: la Ley 27348 fue publicada en el Boletín Oficial el 24 de febrero de 2017, mientras que el Decreto 1022/17 fue dictado el 11 de diciembre de ese mismo año y publicado al día siguiente. Es decir, al momento de introducirse reglamentariamente la exclusión de las costas y gastos causídicos, aquel régimen legal ya se encontraba vigente.

--- En consonancia con ese régimen legal, y también con anterioridad al dictado del Decreto 1022/17, el Superior Tribunal de Justicia, mediante Acordada 34/2017 del 15/11/2017, dispuso incorporar al Cuerpo de Investigación Forense médicos especialistas en medicina laboral o del trabajo, en igual número que Cámaras Laborales en cada Circunscripción, asignándoles específicamente la intervención en las pericias del fuero.

La propia Acordada dejó establecido que esa decisión respondió a la necesidad, advertida por el Fuero del Trabajo, de contar con profesionales especializados que permitieran brindar una respuesta más rápida y eficiente al justiciable frente a las dificultades que presentaba el sistema de peritos externos. Y, particularmente relevante para la cuestión aquí examinada, dispuso expresamente que los honorarios regulados por la intervención de esos profesionales integran las costas del juicio y se afectan a recursos propios del Poder Judicial.

--- De tal modo, la exclusión general de las costas y gastos causídicos dispuesta por una norma reglamentaria posterior puede proyectarse sobre un mecanismo pericial contemplado por una norma de jerarquía legal del mismo sistema -Ley 27348- e implementado en esta Provincia por el Superior Tribunal de Justicia, alcanzando incluso recursos propios del Poder Judicial. En los supuestos en que intervienen profesionales del CIF, aquella restricción determinaría que los créditos correspondientes a sus honorarios, que por disposición expresa integran las costas del juicio, deban procurarse en el proceso liquidatorio de la aseguradora.

--- Ello evidencia una consecuencia adicional de la reglamentación cuestionada: una norma de inferior jerarquía termina incidiendo sobre el funcionamiento y financiamiento de un mecanismo pericial contemplado por el propio legislador nacional y organizado por el Poder Judicial provincial para garantizar la adecuada prestación del servicio de justicia.

--- Cabe aclarar que aun cuando excepcionalmente pudiera intervenir un perito sorteado del listado de auxiliares externos ante la imposibilidad de intervención de aquel organismo (como en el caso referido), ello no obstaría a considerar esta consecuencia

sistémica como argumento adicional respecto del alcance de la norma cuestionada, máxime cuando el propio art. 2 de la Ley 27.348 contempla el recurso a profesionales externos ante la insuficiencia de integrantes de los cuerpos médicos forenses.

--- Estas consecuencias, sin embargo, no constituyen aisladamente el fundamento de la invalidez que propicio. La razón determinante reside en que la restricción no fue establecida por el legislador, sino incorporada por una norma reglamentaria de inferior jerarquía, alterando el alcance del mecanismo legal mediante una excepción que el art. 34 de la LRT no contempla.

--- En este sentido, la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba, al dictaminar en el planteo de inconstitucionalidad formulado en autos "ÁLVAREZ, Marta Silvia c/ ART Liderar S.A.", sostuvo que el Decreto 1022/17 excedía la potestad reglamentaria.

--- En particular, luego de recordar que el art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional autoriza al Poder Ejecutivo a integrar la ley con los detalles necesarios para su cumplimiento "cuidando en dicha tarea no alterar el verdadero espíritu de la misma con excepciones reglamentarias", concluyó que "la limitación prevista en el decreto 1022/2017 [...] altera a todas luces el espíritu de la norma que reglamenta".

--- No desconozco la existencia de criterios contrarios.

En "MONZÓN", antes citado, la Sala V de la CNAT entendió que el Decreto 1022/17 resultaba aplicable respecto de las costas y gastos causídicos y consideró que no existía exceso reglamentario, por entender que el art. 34 de la Ley 24.557 creó el Fondo para abonar las "prestaciones".

No comparto esa interpretación. Precisamente porque las costas y gastos causídicos no son prestaciones autónomas de la LRT, la cuestión no consiste en incorporarlos a esa categoría, sino en determinar si una reglamentación podía introducir una exclusión expresa que el texto legal no contiene.

--- Del mismo modo, la Cámara del Trabajo de Cipolletti en "GONZALEZ MAICOL DANIEL C/ ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO INTERACCION S.A. S/ ORDINARIO (L)" (Expte. N°CI-09531-L-0000) ha adoptado un criterio diferente respecto de la aplicación del Decreto 1022/17 a las costas y gastos causídicos.

Tampoco comparto esa solución. La circunstancia de que la norma reglamentaria establezca expresamente la exclusión no resuelve el problema constitucional aquí planteado: permite conocer qué dispone el Decreto, pero no determina si el Poder Ejecutivo se encontraba constitucionalmente habilitado para introducir esa restricción al reglamentar el art. 34 de la LRT.

--- En definitiva, no se trata de ampliar judicialmente las obligaciones del Fondo más allá de lo dispuesto por la ley, sino de impedir que una norma reglamentaria introduzca una excepción que el legislador no estableció.

--- Por ello, aun teniendo presente que la declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico, advierto en el caso una incompatibilidad concreta entre la exclusión introducida por el Decreto 1022/17, el régimen establecido por el art. 34 de la Ley 24.557 y el límite que el art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional impone al ejercicio de la potestad reglamentaria.

--- Me permito agregar en este punto, la opinión del Dr. Horacio Rosatti, desarrollada en el artículo "La Otra reforma laboral: Decreto 549/25 (nuevo baremo laboral). Un acto jurídico inexistente o inconstitucional", al sostener que; *"En la 3ª edición ampliada y actualizada del Tratado de Derecho Constitucional, Horacio Rosatti desarrolla con precisión técnica el alcance y los límites de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo al analizar el art. 99, inc.2º de la Constitución Nacional (13). Partiendo del texto constitucional, que atribuye al Presidente la facultad de expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias, subraya que se trata de una competencia instrumental y subordinada, afirmando que el reglamento no es una fuente primaria de producción normativa, sino una herramienta destinada a hacer operativa la ley. El autor, integrante del máximo tribunal, distingue técnicamente dos clases de reglamentos: reglamentos de ejecución, que especifican normas de jerarquía superior para posibilitar su aplicación concreta; y reglamentos autónomos, que versan sobre materias propias del ámbito organizativo del Poder Ejecutivo.*

Los mencionados en primer término son aquellos que consisten en la disposición mediante la cual el Ejecutivo regula los detalles y pormenores necesarios para asegurar la aplicación de la ley. En ese sentido, sostiene que el decreto reglamentario integra la ley reglamentada en cuanto la complementa operativamente. Pero esa integración no es creadora ni innovadora, es subordinada.

El punto central del análisis aparece cuando delimita sus límites constitucionales. Allí Rosatti afirma que, como actividad subordinada, la reglamentación ejecutiva está sujeta a restricciones claras: No puede alterar el contenido de la ley, ni establecer excepciones, obligaciones, cargas, sanciones o deberes que el legislador no haya previsto. De hacerlo, el Ejecutivo estaría asumiendo subrepticamente facultades legislativas, en abierta violación del principio de división de poderes. Además, para

poder utilizar dicha facultad, debe recaer sobre materia propia del Ejecutivo o sobre aspectos cuya aplicación la ley le haya encomendado, debiendo respetar el principio de razonabilidad, por lo que en todo caso queda sujeta al control judicial. Rosatti enfatiza, además, que no debe confundirse la reglamentación legislativa propia del Congreso, que regula derechos mediante leyes con la reglamentación ejecutiva, que se limita a complementar los pormenores de una ley para asegurar su cumplimiento efectivo. En suma, el Poder Ejecutivo no puede, bajo la apariencia de reglamentar, modificar el sentido sustancial de la ley ni introducir restricciones no previstas por el legislador. El límite está en el «espíritu» de la norma legal y en el principio republicano de división de poderes.

Desde esta perspectiva, cualquier reglamento que reduzca derechos reconocidos por la ley, que introduzca topes no contemplados por el texto legal o que altere su finalidad protectoria, incurriría según la construcción de Rosatti en un exceso reglamentario constitucionalmente inadmisibile...." ([ver enlace](#)).-

---Dicha opinión, más allá de referirse al nuevo baremo, resulta de clara aplicación a la norma analizada y resultaría concordante con lo expuesto en el voto transcripto.-

--- En consecuencia, en ejercicio del control previsto por el art. 196 de la Constitución Provincial, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 1 del Decreto 1022/17, exclusivamente en cuanto, al sustituir el art. 22 del Decreto 334/96, excluye de la obligación del Fondo de Reserva las costas y gastos causídicos.

--- **III-c.3)** De la inembargabilidad de los recursos del Fondo: Finalmente, la representación del Fondo de Reserva formula oposición a cualquier eventual medida cautelar o ejecutiva que pudiera disponerse sobre sus cuentas, con fundamento en el art. 48 de la Ley 24.557, y sostiene que la satisfacción del crédito reconocido deberá transitar por los procedimientos administrativos establecidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

--- Si bien la norma invocada establece expresamente que los recursos de los Fondos de Garantía y de Reserva son inembargables frente a beneficiarios y terceros, advierto que en el estado actual de las actuaciones no se ha solicitado ni dispuesto medida cautelar o ejecutoria alguna sobre tales recursos.

--- En tales condiciones, no corresponde emitir en esta instancia un pronunciamiento respecto de la procedencia o improcedencia de una eventual medida de ejecución, pues ello importaría resolver anticipadamente una cuestión meramente conjetural, cuya configuración dependerá de la existencia de un eventual incumplimiento y de las

circunstancias concretas que pudieran verificarse en la etapa correspondiente.

--- Sabido es que los pronunciamientos jurisdiccionales deben atender a las circunstancias existentes al tiempo de la decisión, en tanto la función jurisdiccional sólo puede recaer sobre cuestiones concretas y actuales. Así lo sostuvo esta Cámara en autos "NOTARFRANCESCO, VICENTE C. C/ MICRO OMNIBUS 3 DE MAYO S.A. S/ EJECUCIÓN (L)" (PPAL: 25585/14), Expte. BA-05725-L-0000 [-enlace al protocolo web-](#), al considerar que no correspondía expedirse respecto de una cuestión eventual por resultar meramente hipotética.

--- Por ello, corresponde tener presente el planteo formulado respecto de la inembargabilidad prevista por el art. 48 de la Ley 24.557, difiriendo cualquier pronunciamiento sobre su aplicación concreta para el supuesto y oportunidad en que se solicite una medida cautelar o ejecutoria respecto de los recursos del Fondo.

--- **III-d)** Las costas del proceso deberán ser soportadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con cargo al Fondo de Reserva previsto por el art. 34 de la Ley 24.557, por resultar vencida la aseguradora cuya liquidación determinó su intervención y no existir motivos que justifiquen apartarse del principio general que rige en la materia (art. 31 de la Ley 5631 y arts. 62 y ccs. del CPCC), conforme los alcances establecidos en el punto III-c.2) y la declaración de inconstitucionalidad allí dispuesta respecto del art. 1 del Decreto 1022/17.

--- **III-e)** Todo lo argumentado es más que suficiente para discernir la suerte de las cuestiones planteadas en la causa, por cuanto los Jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas ni a seguir a las partes en todos y cada uno de los argumentos que esgrimen en resguardo de sus pretensos derechos, bastando que lo hagan respecto de lo que estimaren conducente o decisivo para resolver el caso y pudiendo preferir algunas de las pruebas en vez de otras u omitir toda referencia a las que estimaren inconducentes o no esenciales (CSJN, Fallos 308:584; 308:2172; 310:1853; 310:2012; etc.; STJRN, 11/03/2014, "Guentemil", Se. 14/14; STJRN, 28/06/2013, "Ordoñez", Se. 37/13, etc).

--- A mayor abundamiento y tratándose de la apreciación de la prueba en el marco del proceso ordinario laboral previsto en la ley 5631, resultan todavía más claras las facultades del Tribunal en cuanto a la selección y apreciación de prueba, tal como lo ha reconocido en forma reiterada el STJ, "...el Tribunal señaló que en virtud del procedimiento propio del fuero, en el cual rige el sistema de apreciación en conciencia (art. 53 inc. 1 de la Ley P N° 1504, actual art. 55 inc.1 de la Ley P N° 5631), los Jueces

laborales tienen un amplio espectro de evaluación de los medios probatorios, lo que les confiere soberanía valorativa. ("ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S/ QUEJA EN: VILLEGAS, MARIANA C/ ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S/ ORDINARIO - RECLAMO LEY DE RIESGO DE TRABAJO - ACCIDENTES DE TRABAJO"(Expte. N° BA-00044-L-2022, fallo del 4-11-24, publicado en la página web jursionegro.gov.ar - entre otros-).-

--- **Conforme lo expuesto en los apartados precedentes, propongo al Acuerdo:**

--- **1)** Declarar la inconstitucionalidad del art. 43 de la Resolución SRT 298/17, conforme los fundamentos expuestos en el apartado III-a).

--- **2)** Declarar la inconstitucionalidad del art. 1 del Decreto 1022/17, exclusivamente en cuanto, al sustituir el art. 22 del Decreto 334/96, excluye de la obligación del Fondo de Reserva las costas y gastos causídicos, conforme los fundamentos expuestos en el apartado III-c.2).

--- **3)** Hacer lugar a la demanda interpuesta por PABLO ALFREDO ANTUNAO contra GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA, actualmente en liquidación, y condenar al pago a la Superintendencia de Seguros de la Nación, con cargo al Fondo de Reserva previsto por el art. 34 de la Ley 24.557, de la suma que resulte de la liquidación que por capital e intereses deberá practicarse en el plazo de cinco días, conforme las pautas establecidas en los apartados III-a), III-b) y III-c.1).

--- **4)** Tener presente el planteo formulado respecto de la inembargabilidad prevista por el art. 48 de la Ley 24.557 y diferir cualquier pronunciamiento sobre su aplicación concreta para el supuesto y oportunidad en que se solicite una medida cautelar o ejecutoria respecto de los recursos del Fondo, conforme lo establecido en el apartado III-c-3).

--- **5)** En función del porcentual de incapacidad fijada, difiérase la regulación de honorarios para la oportunidad en que exista planilla de liquidación definitiva.-

--- **6)** De forma.

--- **Mi voto.**

--- **La Dra. María de los Angeles Pérez Pysny dijo:**

---Compartiendo en lo sustancial los fundamentos que lo sustentan y la forma en que postula resolver las cuestiones planteadas, adhiero al voto del Dr. Serra.

--- **Mi voto.**

--- **La Dra. Alejandra M. Paolino dijo:**

--- En virtud de lo dispuesto por el art. 55 de la Ley 5631, existiendo votos coincidentes, me abstengo de emitir opinión.

--- **Mi voto.**

---**Por todo lo expuesto, la Cámara Segunda del Trabajo de la IIIª Circunscripción Judicial, RESUELVE:**

--- **I.-** Declarar la inconstitucionalidad del art. 43 de la Resolución SRT 298/17, conforme los fundamentos expuestos en el apartado III-a).

--- **II.-** Declarar la inconstitucionalidad del art. 1 del Decreto 1022/17, exclusivamente en cuanto, al sustituir el art. 22 del Decreto 334/96, excluye de la obligación del Fondo de Reserva las costas y gastos causídicos, conforme los fundamentos expuestos en el apartado III-c.2).

--- **III.-** Hacer lugar a la demanda interpuesta por **PABLO ALFREDO ANTUNAO** contra **GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA,** actualmente en liquidación, y condenar al pago a la Superintendencia de Seguros de la Nación, con cargo al Fondo de Reserva previsto por el art. 34 de la Ley 24.557, de la suma que resulte de la liquidación que por capital e intereses deberá practicarse en el plazo de cinco días, conforme las pautas establecidas en los apartados III-a), III-b) y III-c.1).

--- **IV.-** Tener presente el planteo formulado respecto de la inembargabilidad prevista por el art. 48 de la Ley 24.557 y diferir cualquier pronunciamiento sobre su aplicación concreta para el supuesto y oportunidad en que se solicite una medida cautelar o ejecutoria respecto de los recursos del Fondo, conforme lo establecido en el apartado III-c.3).

--- **V.-** Imponer las costas del proceso con cargo al Fondo de Reserva previsto por el art. 34 de la Ley 24.557, por resultar vencida la aseguradora cuya liquidación determinó su intervención, conforme lo resuelto en el apartado III-c.2) (art. 31 de la Ley 5631 y arts. 62 y ccs. del CPCC).

--- **VI.-** En función del porcentual de incapacidad fijada, difiérase la regulación de honorarios para la oportunidad en que exista planilla de liquidación definitiva.-

--- **VII.-** Las sumas fijadas en los apartados precedentes deberán ser abonadas dentro del plazo de diez días de aprobada la planilla de liquidación definitiva.

--- En caso de incumplimiento, devengarán, desde el vencimiento de dicho término y hasta su efectiva cancelación, los intereses conforme las pautas establecidas en el apartado correspondiente de la presente.

--- Asimismo, y con cargo al Fondo de Reserva en su condición de obligado al pago de las costas conforme lo resuelto precedentemente, deberá adicionarse el IVA, en caso de corresponder según la situación tributaria de los profesionales intervinientes.

--- **VIII.-** Hágase saber a las partes que en la oportunidad de practicar liquidación, deberá incluir las sumas correspondientes a impuestos y contribuciones de ley, ello a los fines de la emisión del formulario de costas Nro. 008, debiendo cancelarse los tributos previo a la liberación de fondos en autos (art. 2585 del Código Civil y Comercial de la Nación y las Acordadas Nro. 18/14 y 33/20 del S.T.J.).-

--- **IX.-** Regístrese y protocolícese por sistema.-

--- **X.-** Hágase saber a las partes que quedarán notificadas en los términos del art. 25 de la Ley 5631.